

San Miguel, dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Primero: Que en estos antecedentes Ingreso Corte N°744-2023, RIT O-38-2023, RUC 23- 4-0488151-5, provenientes del Segundo Juzgado de Letras de Talagante, caratulados "Carmen Gloria Poblete Saavedra con Ganadera y Agrícola Lonquen SpA y otros", por sentencia definitiva de treinta de octubre de dos mil veintitrés se acogió la demanda y se declaró que existe unidad económica entre las demandadas Ganadera y Agrícola Lonquén Spa, Sociedad Comercial Andoni Ltda., y don Gonzalo Rodrigo Baeza Rubio, se declaró también relación laboral entre dichas partes, indicando su período de vigencia, calificando además como injustificado su despido y ordenando el pago de diversas prestaciones, con costas.

Segundo: Que en contra del aludido fallo, el abogado de la parte demandada, don Constantino Andrés Carreño Henríquez, interpuso recurso de nulidad invocando la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su primera hipótesis, esto es, *"cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos fundamentales"*, aludiendo en forma específica que la causal de nulidad que invoca se encuentra íntimamente relacionada con la disposición establecida en el artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho fundamental del debido proceso, pero que se extiende como un principio que cruza toda disposición procesal.

Tercero: Que como se dijo el recurso de nulidad planteado por el recurrente se funda en la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo en la hipótesis de infracción a las garantías constitucionales. En este caso y luego de hacer mención de la acción deducida y las partes del juicio, refiere que el 25 de agosto de 2023 se llevó a cabo audiencia preparatoria, mencionando que asistió a la misma en representación de don Gonzalo Rodrigo Baeza Rubio ofreciendo la prueba que en la citada acta se consigna, reconoce además que quedó personal y válidamente notificado de la audiencia de juicio a celebrar el 10 de octubre de 2023, a las 10:00 horas en dependencias del tribunal ubicado en la comuna de Talagante. Sin embargo la citada audiencia se celebró sin su comparecencia y en rebeldía de la parte demandada, Sr. Gonzalo Baeza Rubio.

Argumenta que el 12 de octubre pasado alegó entorpecimiento o impedimento y en forma subsidiaria, alegó entorpecimiento en relación con la recepción de la prueba, solicitando que se habilite un término especial de prueba en la forma prevista en el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, fundado en el hecho que en su trayecto hacia al Tribunal de Talagante, desde la comuna de Santiago, sufrió graves complicaciones de salud, las que describe y que refiere le obligaron a pasar de forma urgente a la comuna de Peñaflor a solicitar atención médica de urgencia en el Cesfam de dicha comuna, lo que acredita mediante presentación del respectivo certificado médico extendido por el Dr. Paul Pardo; a su vez y en atención a que los malestares fueron aumentando, a su regreso a Santiago requirió asistencia en el Servicio de Urgencia de la comuna de Conchalí, donde fue atendido cerca de las 11 horas de la mañana por el Profesional Dr. Kefrent Hernández, quien diagnosticó en calidad de "sospecha



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEBPXMEKXDK

diagnóstica" una Gastroenteritis Aguda y Covid-19, entregándole el respectivo certificado médico.

Manifiesta que la situación descrita lo imposibilitó incorporar la prueba ofrecida en audiencia preparatoria y se rindiera la prueba ofrecida, la que cita.

Indica que a su solicitud de entorpecimiento, acompañó los dos certificados médicos de 10 de octubre de 2023 que dan cuenta de su estado de salud en aquél día, y fundó tal petición de acuerdo a lo previsto en los artículos 432 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, no obstante éste fue desestimado por el tribunal en base a la siguiente argumentación: *"A lo principal y otrosí: Atendido de lo expuesto que no se desprenden antecedentes suficientes, habiéndose además podido delegar poder en otor profesional o adoptar otra medida pertinente, este a lo que se resolverá a continuación. Al segundo otros: Por acompañados. Que atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 83 en relación con el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, se RESUELVE DE PLANO: I.- Que no ha lugar al incidente de entorpecimiento e impedimento para asistir a la audiencia de juicio celebrada con fecha 10 de octubre de 2023. II.- Que no ha lugar a habilitación de un término especial de prueba. II.-Que no se condena en costas por estimarse que ha tenido motivo plausible para incidentar." (sic)*

Cuestiona la decisión del tribunal a quo pues sostiene que estaba acreditado mediante competentes certificados médicos que el recurrente, representante de la parte demandada, no había podido presentarse físicamente a la audiencia decretada, aludiendo además que tales documentos fueron extendidos por dos profesionales distintos, que prestan servicios en dos organismos públicos diferentes -no son médicos particulares, que realizan actividades lucrativas- uno, constituido por el Cesfam de Peñaflor y otro, por el Servicio de Urgencia de la Comuna de Conchalí, todo ello, dando cuenta de la veracidad de sus dichos, pues pese a que se encuentra afiliado a la Isapre Consalud, dada la extrema magnitud de sus dolencias, se vio en la obligación de buscar asistencia en los centros médicos más cercanos, como los descritos.

Añade que reside en la ciudad de Santiago y que el traslado hasta el tribunal contempla una duración de al menos 50 minutos, que lo decidido por el tribunal priva a su representado de la posibilidad de defensa y de rendir la prueba que oportunamente ofreció, cuestión que vulnera lo dispuesto en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, dado que al rechazar el entorpecimiento alegado, no considerando sus fundamentos fácticos, incluso imposibilitando que se ofreciera prueba sobre su ocurrencia, dejó a la parte demandada sin posibilidad de acreditar sus dichos en un procedimiento racional y justo, infringiéndose el debido proceso consagrado y garantizado en la normas constitucional aquí citada.

Tercero: Que, el recurso de nulidad laboral tiene por objeto, según sea la causal invocada, velar por la correcta aplicación del derecho, ya sea asegurando el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o de las disposiciones legales al caso concreto. También el recurso de nulidad vela por la adecuada determinación de los hechos en la sentencia, ya sea por aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la



prueba, o por el análisis completo de ésta, con el objeto que los hechos que se den por establecidos puedan conocerse los razonamientos que llegan a determinarlos.

Su carácter extraordinario se manifiesta en la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de sus referidas causales en atención al fin perseguido por ellas, situación que igualmente determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales superiores y que, como contrapartida, impone al recurrente la obligación de precisar con rigurosidad los fundamentos de las que invoca, de las peticiones que efectúa, lo que, por lo demás, conlleva coherencia en sus alegaciones. (Laboral-Cobranza N 1.143-2020, Corte de Apelaciones de Santiago 28.07.2020).

Cuarto: Que, se invocó la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo en su primera hipótesis, esto es, *“Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales”*.

En primer término importa dejar establecido que por la naturaleza de la causal invocada, el recurrente acepta todo el sustento fáctico de la sentencia y en este escenario la infracción del artículo 477 del Código del Trabajo, relacionada con la infracción sustancial de derechos o garantías constitucionales durante el procedimiento o en la dictación de la sentencia la Constitución Política de la República, en su artículo 19 numeral 3°, esta disposición reconoce a todas las personas la garantía del debido proceso, derecho fundamental que implica que las decisiones de los órganos que ejerzan jurisdicción se funden en un proceso previo y legalmente tramitado, que cumpla estándares mínimos para asegurar que la controversia planteada se de en forma razonable, esta circunstancia, entrega legitimidad a la decisión jurisdiccional y queda supeditada a la existencia de un órgano independiente e imparcial que se encuentra establecido previamente por la ley, dotado de la prerrogativa de conocer y juzgar de una materia, que ha de adoptar su decisión como resultado de un proceso previo que esté revestido de reglas formales constitutivas de un procedimiento racional y justo, entre cuyas notas más características se encuentra permitir el adecuado ejercicio del derecho de defensa.

La referida noción se encuentra conformada por un conjunto de garantías que la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por Chile y en vigencia, y las leyes le entregan a las partes de la relación procesal, y a través de las cuales se pretende que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que se respeten los procedimientos fijados por la ley y que las sentencias sean debidamente fundadas.

Quinto: Que, a fin de llevar a cabo un adecuado análisis de la causal que se invoca, corresponde dejar establecida la siguiente secuencia de hechos:

a) Que el recurrente en audiencia de 25 de agosto de 2023, quedó notificado personal y presencialmente para asistir a la audiencia de juicio ante el Segundo Juzgado de Letras de Talagante, a celebrarse el 10 de octubre de 2023, a las 10.00 horas.



b) Que el recurrente de entorpecimiento le fue delegado el poder para comparecer en autos, conforme consta autorización de Folio 61 de 25 de agosto de 2023.

c) Que la audiencia de juicio se llevó a cabo, en rebeldía del recurrente y de su representado, dada su ausencia no incorporó la prueba ofrecida en audiencia preparatoria.

d) Que el recurrente alegó entorpecimiento el 12 de octubre de 2023, adjuntando a su presentación dos certificados médicos cuyo diagnóstico da cuenta de gastroenteritis.

e) Que el entorpecimiento alegado fue desestimado por el tribunal.

f) Que se dictó sentencia definitiva acogiendo la demanda en los términos expuestos en el motivo primero de la presente sentencia.

Sexto: Que precisado lo anterior y para el efecto de verificar la concurrencia de la causal de nulidad invocada es necesario establecer si la inasistencia a la audiencia de juicio por parte del abogado de la demandada estaba o no justificada, para luego, en el evento que estuviera justificada, determinar si el realizar la audiencia sin su comparecencia afectó o no el principio de inmediación.

Séptimo: Que, con respecto a la incomparecencia de la parte recurrente y en la cual incorpora dos certificados médicos, es posible observar que ambos documentos si bien enuncian lo descrito por el abogado de la demandada en relación al lugar de atención y el diagnóstico, no indican la hora de atención, además uno de ellos contiene la fecha en el costado superior derecho -10-10-2023-, y da cuenta que el recurrente refiere a tal facultativo que su dolencia lo aquejaba dos días antes de aquella visita.

Octavo: Que en este caso importa tener presente la definición que entrega el Diccionario de la Real Academia Española del vocablo “entorpecimiento” como “acción o efecto entorpecer o entorpecerse” y “entorpecer” como “turbar, retardar, dificultar”, de lo cual aparece que el entorpecimiento es el obstáculo que dificulta el espacio de tiempo que constituye el término probatorio. La doctrina señala que el “entorpecimiento” tiene que corresponder a un OBSTÁCULO que, dada su naturaleza, sea insuperable para la parte solicitante, y no puede ser por culpa o provocado por dicha parte.

En este línea argumentativa la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol 1653-2009 ha explicado el concepto de entorpecimiento de la siguiente forma: "Que puede definirse la expresión “entorpecimiento” como “todo obstáculo, así subjetivo u objetivo como legal, que se oponga de un modo imprevisto al transcurso normal del término probatorio” (Carlos Anabalón Sanderson, “El Juicio Ordinario de Mayor Cuantía”, Editorial Jurídica de Chile, 1954, página 246).

Noveno: Que así entonces y en atención a la documental citada -certificados médicos-, se aprecia que la documental incorporada para acreditar el entorpecimiento en los términos que plantea el recurrente, no resulta suficiente para así considerarla, pues el peticionario tuvo al menos conocimiento de su estado de salud dos días antes de la celebración de la audiencia de juicio de 10 de octubre de 2023, hecho que debió poner en conocimiento del abogado patrocinante de la causa en atención a que el compareciente sólo es un delegado. En definitiva, el entorpecimiento aludido, no era de aquellos insuperables, de modo que el tribunal *a quo* al resolver como lo hizo, no afectó el debido



proceso, como sostiene el recurrente, por el contrario únicamente llevó a cabo la audiencia en los términos que el artículo 454 del Código del Trabajo dispone.

Por lo demás la aplicación supletoria pedida por el citado abogado, de las normas del Código de Procedimiento Civil, en virtud de lo previsto en el artículo 432 del Código del Trabajo, procede en tanto que ello no sea contrario a los principios propios que inspiran el estatuto laboral, y que se encuentran previstos en el artículo 425 del Código del Trabajo, cuyo inciso primero establece: *«Los procedimientos del trabajo serán orales, públicos y concentrados. Primarán en ellos los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad»*.

Décimo: Que visto lo anterior, el juez a quo al no dar lugar al entorpecimiento del abogado de la parte demandada no afectó la garantía al debido proceso y como consecuencia de aquello, ni durante la tramitación del juicio, ni mucho menos en la sentencia se ha incurrido en la infracción denunciada, por la causal de invalidación opuesta, será desestimada.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 477 a 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por el abogado don Constantino Andrés Carreño Henríquez, por la demandada, contra la sentencia definitiva, de treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictada en estos autos por el Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras de Talagante, la que en consecuencia no es nula como tampoco el juicio que la antecedió.

Regístrese y devuélvase por la vía correspondiente.

Redacción ministra (S) Alondra Castro Jiménez.

Rol N° 744-2023 Laboral

Pronunciado por la Quinta Sala de esta Corte, presidida por la ministra señora Ma. Carolina Catepillán Lobos, ministro señor Carlos Farías Pino y ministra (s) señora Alondra Castro Jiménez.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEBPXMEKXDK

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Carolina U. Catepillan L., Carlos Cristobal Farias P. y Ministro Suplente Alondra Valentina Castro J. San Miguel, dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro.

En San Miguel, a dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEBPXMEKXDK